



Asamblea General

Distr. general
25 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 38/2020, relativa a Tito Elia Magoti (República Unida de Tanzania)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 12 de marzo de 2020 al Gobierno de la República Unida de Tanzania una comunicación relativa a Tito Elia Magoti. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Tito Elia Magoti, nacido en 1993, es ciudadano de la República Unida de Tanzania. Es abogado y gestor del programa Mass Education (educación de la ciudadanía) del Legal and Human Rights Centre, una organización con sede en la República Unida de Tanzania que trabaja para empoderar a la ciudadanía y promover, reforzar y salvaguardar los derechos humanos y la buena gobernanza en el país.

a. Detención y privación de libertad

5. Según la fuente, el 20 de diciembre de 2019, el Sr. Magoti fue secuestrado en Dar es Salam, en la República Unida de Tanzania, por cuatro hombres de identidad desconocida, que lo esposaron y se lo llevaron en un vehículo civil. La policía había utilizado a un colega del Sr. Magoti para que enviara a este un mensaje de texto a fin de atraerlo al lugar de los hechos.

6. La fuente explica que, inmediatamente después del secuestro, diversas organizaciones de derechos humanos buscaron al Sr. Magoti en varias comisarías de policía, pero no lograron localizarlo. El 20 de diciembre de 2019, por la tarde, el jefe de la Zona Policial Especial de Dar es Salam emitió un comunicado de prensa en el que informaba de que el Sr. Magoti se encontraba recluido en dependencias policiales junto con otras personas. No se indicaron ni el lugar de reclusión ni las infracciones imputadas. Aunque las autoridades reconocieron que mantenían recluido al Sr. Magoti, no se informó de su paradero a su familia, a su empleador ni a su representante legal, ni se permitió que estos hablaran con él. La incertidumbre acerca del paradero del Sr. Magoti se agravó con la declaración contradictoria del jefe de policía de Kinondoni —el distrito en el que se había practicado la detención—, quien afirmó no tener conocimiento de los hechos.

7. El 23 de diciembre de 2019, se presentó una petición urgente contra el jefe de la Zona Policial Especial de Dar es Salam y el Fiscal General para exigir la puesta en libertad del Sr. Magoti, cuyo paradero y cuyas presuntas infracciones aún no se habían revelado. El 24 de diciembre de 2019, el Sr. Magoti, junto con uno de sus colegas, que también había sido detenido, fue llevado ante el Tribunal de Jueces Residentes (primera instancia) de Kisutu, en Dar es Salam, y se retiró la petición.

8. El Sr. Magoti fue trasladado primero a la comisaría de Tazara y luego a la de Mbweni. Durante el segundo traslado, permaneció con los ojos vendados.

9. La fuente explica que la policía interrogó al Sr. Magoti sobre su uso de los medios sociales y sus vínculos con ciertos ciudadanos que habían criticado públicamente al Gobierno.

10. El Sr. Magoti ha sido acusado de las siguientes infracciones: a) dirección de delincuencia organizada, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 4, apartado 1 a), del Primer Anexo y los artículos 57, párrafo 1, y 60, párrafo 2, de la Ley de Lucha contra los Delitos Económicos y la Delincuencia Organizada (cap. 200, ed. rev. de 2002), en su versión revisada; b) posesión de un programa informático diseñado con fines de delincuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 1 a), de la Ley de Delitos Informáticos (Ley núm. 14 de 2015), leído conjuntamente con el párrafo 36 del Primer Anexo y los artículos 57, párrafo 1, y 60, párrafo 2, de la Ley de Lucha contra los Delitos Económicos y la Delincuencia Organizada, en su versión revisada; y c) blanqueo de dinero, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 12, apartado d), y 13, apartado a), de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, de 2006, leídos conjuntamente con el párrafo 22 del Primer Anexo y los artículos 57, párrafo 1, y 60, párrafo 2, de la Ley de Lucha contra los Delitos Económicos y la Delincuencia Organizada, en su versión revisada.

La fuente explica que las acusaciones formuladas contra el Sr. Magoti impiden a este solicitar la libertad bajo fianza.

11. Actualmente, el Sr. Magoti se encuentra recluido en prisión preventiva en el centro penitenciario de Segerea.

b. Análisis jurídico

12. La fuente sostiene que la reclusión del Sr. Magoti constituye una privación arbitraria de su libertad y se inscribe en las categorías I, II, III y V. A continuación se ofrecen explicaciones en relación con cada una de las categorías, salvo la V.

i. Categoría I

13. La fuente alega que el Sr. Magoti fue detenido sin que mediara una orden judicial. Lo esposaron, le vendaron los ojos y lo metieron por la fuerza en un vehículo civil, en una sucesión de acciones equiparable a un secuestro. Además, según la fuente, no se informó inmediatamente al Sr. Magoti de los motivos de su detención ni se le comunicaron sin dilación las acusaciones que pesaban en su contra, lo que constituyó una vulneración de las garantías del debido proceso.

14. La fuente afirma asimismo que el Sr. Magoti permaneció recluido en dependencias policiales cuatro días, durante los que fue interrogado sin que se le permitiera acceder a un abogado ni hablar con su familia. Además, la policía no llevó al Sr. Magoti ante un tribunal de justicia en el plazo de 24 horas previsto en la legislación nacional ni en cuanto fue posible. La fuente añade que el vendar los ojos al Sr. Magoti fue un acto cruel e inhumano.

15. La fuente sostiene también que la detención del Sr. Magoti se ajusta a un patrón de inobservancia de las garantías del debido proceso por las autoridades.

ii. Categoría II

16. A modo de referencia general, la fuente informa de que el Gobierno ha sido criticado por el creciente silenciamiento de los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, los periodistas, los blogueros, los políticos de la oposición y sus partidarios, los medios de comunicación y otras voces disidentes de la República Unida de Tanzania.

17. La fuente sostiene que las acusaciones formuladas contra el Sr. Magoti constituyen una represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En particular, durante su reclusión en dependencias policiales, el Sr. Magoti fue presuntamente interrogado sobre su uso de los medios sociales y sus vínculos con otro activista y propietario de medios de comunicación y con un político de la oposición. Según se informa, tanto el uno como el otro critican duramente al Gobierno, y ambos están sufriendo diversas formas de represalia por exigir a este rendición de cuentas y transparencia.

18. La fuente señala que el Sr. Magoti es un abogado que ha trabajado a título profesional y personal para promover los derechos humanos en la República Unida de Tanzania y se ha dedicado abiertamente a cuestiones de interés público. La fuente concluye que enjuiciar a una persona por dedicarse a cuestiones de interés público y asociarse con ciudadanos de opiniones similares a la suya constituye una vulneración del derecho internacional, en particular de los derechos a la libertad de expresión, la participación política y la libertad de asociación.

iii. Categoría III

19. Según la fuente, el Sr. Magoti fue detenido el 20 de diciembre de 2019, y no se le informó en el momento de las razones a las que obedecía su detención. Pasó cuatro días recluido en dependencias policiales antes de ser llevado ante un tribunal el 24 de diciembre de 2019, y fue entonces cuando se le informó de las acusaciones que pesaban en su contra. La fuente se remite a las disposiciones del artículo 9, párrafos 2 y 3, del Pacto y recuerda que el Comité de Derechos Humanos ha explicado que los plazos no deben exceder de unos pocos días desde el momento de la detención y que normalmente es suficiente un plazo de 48 horas.

20. La fuente sostiene que, aunque finalmente se informó al Sr. Magoti de las acusaciones formuladas en su contra, el escrito de acusación no se ajusta a las normas internacionales. En el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto se establece que, en la sustanciación de una acusación de carácter penal, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a “ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. La fuente afirma que, claramente, no hay suficiente información sobre los hechos que respalde las alegaciones formuladas contra el Sr. Magoti. La acusación de “dirección de delincuencia organizada” obedece a que, supuestamente, en varias fechas comprendidas entre febrero y diciembre de 2019, el Sr. Magoti organizó en Dar es Salam una operación delictiva, con un programa informático diseñado al efecto, por medio de la cual obtuvo la suma de 17.354.535 chelines tanzanos. No se proporciona información sobre las características del programa informático, el delito que se cometió utilizando dicho programa o la forma en que se utilizó este para obtener tal suma. Así pues, el Sr. Magoti carece de suficiente información sobre el alcance de la causa incoada en su contra, lo que merma gravemente sus posibilidades de prepararse para el juicio.

21. Además, la fuente afirma que, durante los cuatro días que el Sr. Magoti permaneció en dependencias policiales, se le impidió consultar a su abogado mientras lo interrogaban. Según la fuente, esto constituyó una vulneración del artículo 14 del Pacto. Durante esos días, no se le dio la oportunidad de informar a su familia de su detención y del lugar en que permanecía recluido. Además, le vendaron los ojos y lo trasladaron de una comisaría a otra. Por consiguiente, la fuente sostiene que la República Unida de Tanzania ha vulnerado los derechos del Sr. Magoti.

22. Según la fuente, en el artículo 148, párrafo 5, de la Ley de Procedimiento Penal se establece que un agente de policía encargado de una comisaría, o un tribunal ante el que sea llevado o comparezca un acusado, no puede conceder la libertad bajo fianza cuando se imputan determinados delitos, entre ellos el blanqueo de dinero, según se tipifica este en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero. Así pues, esta disposición prevé una denegación general de la libertad bajo fianza para los acusados de determinados delitos y, por tanto, el Sr. Magoti no tiene derecho a beneficiarse de dicha medida y permanece recluido en espera de que se resuelva su causa. La fuente alega que el artículo 148, párrafo 5 a), de la Ley de Procedimiento Penal y la consiguiente denegación del derecho del Sr. Magoti a solicitar la libertad bajo fianza constituyen una vulneración de las garantías del debido proceso enunciadas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 9 y 14 del Pacto y los principios 38 y 39 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

23. Además, la fuente señala que, en la República Unida de Tanzania, los acusados de delitos para los que no se admite la libertad bajo fianza pueden pasar años recluidos en espera de juicio. Según la fuente, el Sr. Magoti ha sido enjuiciado en represalia por sus críticas públicas al Gobierno, y su imputación tiene por fin deliberado mantenerlo recluido en espera de juicio durante un período extenso. La fuente explica que, después de que el Sr. Magoti compareciera ante el tribunal el 24 de diciembre de 2019, su vista se aplazó hasta el 7 de enero de 2020. La vista se aplazó tres veces más, según se explica a continuación, porque la fiscalía alegó que todavía no había concluido su investigación. Una vez que la fiscalía indicó que había alcanzado un grado satisfactorio en la investigación, pidió que la vista se celebrara el 21 de enero de 2020. Sin embargo, en esa fecha, la fiscalía solicitó un nuevo aplazamiento alegando que, aunque se había alcanzado un grado satisfactorio en la investigación, esta no había sido completa. Tras escuchar los argumentos y contraargumentos de la fiscalía y la defensa, el presidente del tribunal aplazó la vista hasta el 5 de febrero de 2020. En esa fecha, la vista se volvió a aplazar hasta el 19 de febrero de 2020.

24. La fuente concluye que la privación de libertad del Sr. Magoti, sin posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza, constituye una vulneración de las normas regionales e internacionales y es, por tanto, arbitraria. Además, la fuente teme que la reclusión previa al juicio del Sr. Magoti se siga prolongando como forma de castigo extrajudicial.

25. En cuanto al aplazamiento de la vista, la fuente sostiene que, aunque el plazo transcurrido entre la acusación y el juicio fue relativamente breve, las repetidas demoras van contra el espíritu de la norma general sobre el derecho a un juicio sin dilaciones y el principio de que toda demora debe redundar en beneficio de la justicia y limitarse al tiempo mínimo necesario. Hasta el momento, la fiscalía ha solicitado el aplazamiento de la vista en tres ocasiones, alegando que la investigación seguía en curso. Estas solicitudes se formularon pese a que las fechas de 7 y 21 de enero y 5 de febrero de 2020 se programaron con el conocimiento de la fiscalía. El Sr. Magoti y su abogado comparecieron ante el tribunal preparados para la vista en las tres fechas. La fuente afirma que la policía detuvo al Sr. Magoti con el fin de realizar investigaciones, en contra de lo que dictan las mejores prácticas. El derecho a un juicio sin dilaciones se ha consagrado no solo para evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en un estado de incertidumbre acerca de su suerte, sino también, si se las mantiene recluidas durante el período del juicio, para garantizar que dicha privación de libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso. Dado que el Sr. Magoti ha sido acusado de un delito que le niega automáticamente el derecho a la libertad bajo fianza, redundará en beneficio de la justicia que este asunto se tramite sin dilaciones indebidas.

Respuesta del Gobierno

26. El 12 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que presentara, con fecha límite el 11 de mayo de 2020, información detallada actualizada sobre la situación del Sr. Magoti, así como las observaciones que deseara formular en relación con las alegaciones de la fuente. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que velara por la integridad física y mental del Sr. Magoti.

27. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno y que este tampoco haya solicitado una prórroga del plazo para responder con arreglo a lo previsto en los métodos de trabajo del Grupo.

Deliberaciones

28. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

29. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

30. La fuente ha formulado varias alegaciones en relación con la privación de libertad del Sr. Magoti y ha afirmado que esta se inscribe en las categorías I, II, III y V. El Grupo de Trabajo examinará las alegaciones relativas a cada una de estas categorías por separado.

Categoría I

31. El Grupo de Trabajo procede a examinar si se han cometido vulneraciones que se inscriban en la categoría I, que se refiere a la privación de libertad sin fundamento jurídico.

32. La fuente alega que el Sr. Magoti fue detenido sin que existiera fundamento jurídico, ya que no se le presentó una orden en el momento de la detención ni se le informó sin dilación de las acusaciones que pesaban en su contra y, a continuación, permaneció cuatro días recluido en dependencias policiales sin ser llevado ante un tribunal ni poder acceder a un abogado. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno optó por no responder a estas afirmaciones, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo.

33. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con

arreglo al procedimiento establecido en esta. Como ha afirmado el Grupo de Trabajo¹, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención. En el presente caso, el Sr. Magoti fue secuestrado por cuatro hombres de identidad desconocida, esposado y recluido en dependencias policiales. A continuación, el jefe de policía emitió un comunicado de prensa relativo a su reclusión. Dado que el Gobierno no ha ofrecido explicación alguna sobre el procedimiento seguido para la reclusión del Sr. Magoti, el Grupo de Trabajo considera que la policía ha estado implicada en ese secuestro *de facto*. El Grupo de Trabajo concluye no se presentó al Sr. Magoti una orden de detención y que no se siguió el correspondiente procedimiento para una detención legal, por lo que se vulneraron el artículo 9, párrafo 1, del Pacto y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

34. Además, el Grupo de Trabajo considera que una detención es arbitraria cuando se practica sin informar a la persona interesada, en el momento de su detención, de las razones por las que está siendo detenida, y sin notificarle sin demora la acusación formulada contra ella, como se exige en el artículo 9, párrafo 2, del Pacto². Sobre la base de la información proporcionada por la fuente, que no fue refutada por el Gobierno, no se informó al Sr. Magoti en el momento de su detención de las razones a que obedecía esta ni se le notificó sin demora la acusación formulada en su contra, por lo que se vulneraron el artículo 9, párrafo 2, del Pacto y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

35. Con arreglo al artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez. Como ha establecido el Consejo de Derechos Humanos, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial tras la detención, y todo plazo superior deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas³. El Grupo de Trabajo observa además con preocupación que el Sr. Magoti no fue llevado ante un juez hasta que se presentó una petición urgente, emitida, al parecer, por sus representantes legales y dirigida contra el jefe de la Zona Policial Especial de Dar es Salam y el Fiscal General, para exigir su puesta en libertad. Dado que no se ha ofrecido ninguna explicación para justificar la demora en el presente caso, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno vulneró el artículo 9, párrafo 3, del Pacto al no llevar al Sr. Magoti ante un juez hasta el 24 de diciembre de 2019, después de que hubiera sido detenido el 20 de diciembre de 2019.

36. El Grupo de Trabajo observa que, para que una privación de libertad se considere legal, la persona privada de libertad debe tener derecho a impugnar la legalidad de su privación de libertad ante un tribunal, según se prevé en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. El Grupo de Trabajo desea recordar que, de conformidad con los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo, que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática (A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3). Este derecho, que es en realidad una norma imperativa de derecho internacional, se aplica a todas las formas de privación de libertad (*ibid.*, párr. 11), incluidas no solo la detención a efectos de un proceso penal, sino también las situaciones de detención bajo el orden jurisdiccional administrativo y de otro tipo, como la detención militar, la detención de seguridad, la detención en virtud de medidas de lucha contra el terrorismo, el confinamiento involuntario en centros médicos o psiquiátricos, la detención de migrantes, la detención con fines de extradición, las detenciones arbitrarias, el arresto domiciliario, la detención en régimen de aislamiento, la detención por vagabundeo o adicción a las drogas y la detención de niños con fines educativos (*ibid.*, anexo, párr. 47 a)). Además, se aplica independientemente del lugar de detención o la terminología jurídica

¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 9/2019, párr. 29, y núm. 52/2019, párr. 21.

² Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 10/2015, párr. 34, y núm. 46/2019, párr. 51.

³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 33.

utilizada en la legislación, y toda forma de privación de libertad por cualquier motivo debe estar sujeta a la supervisión y el control efectivos del poder judicial (*ibid.*, párr. 47 b)).

37. El Grupo de Trabajo observa que, aunque las autoridades reconocieron que mantenían recluido al Sr. Magoti, negaron a este el contacto con el mundo exterior y, en particular, con su familia y su abogado. Así pues, de la información presentada por la fuente se desprende que el Sr. Magoti permaneció recluido en régimen de incomunicación durante cuatro días, del 20 al 24 de diciembre de 2019. El Grupo de Trabajo ha dictaminado sistemáticamente que la reclusión en régimen de incomunicación vulnera el derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal, reconocido en el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto⁴. El Grupo de Trabajo considera que la supervisión judicial de la privación de libertad constituye una salvaguardia fundamental de la libertad personal y resulta esencial para garantizar que la privación de libertad tenga fundamento jurídico.

38. El Grupo de Trabajo concluye que la detención y la privación de libertad del Sr. Magoti carecen de fundamento jurídico, por lo que son arbitrarias y se inscriben en la categoría I.

Categoría II

39. La fuente señala que el Sr. Magoti fue detenido por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, la participación política y la libertad de asociación.

40. La fuente afirma que el Sr. Magoti es un abogado que ha trabajado a título profesional y personal para promover los derechos humanos en la República Unida de Tanzania y se ha dedicado abiertamente a cuestiones de interés público, y el Gobierno no ha refutado esta afirmación. La fuente sostiene que el Sr. Magoti fue enjuiciado por dedicarse a cuestiones de interés público y por asociarse con ciudadanos que han expresado opiniones críticas contra el Gobierno.

41. El Grupo de Trabajo recuerda que en el artículo 19, párrafo 2, del Pacto se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Este derecho abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo⁵. También ampara la defensa y la expresión de opiniones, incluidas las que son críticas de la política de un gobierno o no se ajustan a ella⁶.

42. Ese derecho solo puede restringirse en aras del respeto de los derechos o la reputación de otras personas o para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El Comité de Derechos Humanos ha establecido que no se permiten restricciones por motivos que no estén especificados en el artículo 19, párrafo 3, aunque esos motivos pudiesen justificar restricciones de otros derechos protegidos por el Pacto. Las restricciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente con la necesidad específica de la que dependen⁷. Además, no se puede hacer valer el artículo 19, párrafo 3, como justificación para silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos humanos⁸. Cabe señalar que en virtud del artículo 22 del Pacto se permiten restricciones del derecho de asociación por esos tres mismos motivos.

43. La fuente indicó que la policía había interrogado al Sr. Magoti sobre su uso de los medios sociales y sus vínculos con ciertas personas que criticaban al Gobierno. El Grupo de Trabajo observa que esas preguntas no parecen guardar relación con las presuntas

⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 45/2017, párr. 29; núm. 79/2017, párr. 49; y núm. 52/2019, párr. 23. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 35.

⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 11.

⁶ Opiniones núm. 79/2017, párr. 55; y núm. 8/2019, párr. 55.

⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 22.

⁸ *Ibid.*, párr. 23.

infracciones de la Ley de Lucha contra los Delitos Económicos y la Delincuencia Organizada, la Ley de Delitos Informáticos y la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero que se imputan al Sr. Magoti.

44. Además, el Grupo de Trabajo considera que las críticas expresadas por el Sr. Magoti a través de los medios sociales y en su labor periodística se referían a cuestiones de interés público. Por tanto, el Sr. Magoti fue privado de libertad por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrado en el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25 a) del Pacto.

45. Según la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y a señalar a la atención del público cuestiones relativas a la observancia de los derechos humanos. El Sr. Magoti fue recluido por ejercer los derechos que le reconoce esa Declaración. La reclusión de personas por sus actividades de defensa de los derechos humanos vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley, reconocido en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto.

46. Puesto que el Gobierno no ha rebatido las alegaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo considera que se han presentado indicios razonables de que la detención y la privación de libertad del Sr. Magoti obedecieron a su ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 19, 21, 25 y 26 del Pacto y los artículos 7, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, por consiguiente, son arbitrarias y se inscriben en la categoría II.

Categoría III

47. A la luz de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Magoti es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo subraya que el Sr. Magoti no debe ser juzgado. Sin embargo, el Sr. Magoti sigue privado de libertad, y la fuente ha afirmado que se ha vulnerado su derecho a un juicio imparcial, por lo que su privación de libertad también se inscribe en la categoría III de la detención arbitraria.

48. La fuente alega además que el escrito de acusación presentado contra el Sr. Magoti no se ajusta a las normas internacionales, ya que no contiene suficiente información sobre las acusaciones formuladas ni sobre los hechos en que se basan, lo que merma las posibilidades del Sr. Magoti de prepararse para el juicio. En el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto se establece que, en la sustanciación de una acusación de carácter penal, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación. El Comité de Derechos Humanos ha observado que, para que se satisfagan las exigencias previstas en el artículo 14, párrafo 3 a), en la información proporcionada a la persona se deben indicar tanto la ley como los supuestos hechos generales en que se basa la acusación⁹. Puesto que el Gobierno no ha facilitado información detallada sobre la acusación formulada contra el Sr. Magoti, el Grupo de Trabajo concluye que, según parece, la acusación no es clara ni está suficientemente fundamentada, lo que ha mermado la capacidad del Sr. Magoti para defenderse y constituye una contravención del artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto.

49. El Grupo de Trabajo considera asimismo que las autoridades no respetaron el derecho del Sr. Magoti a la asistencia jurídica, que es inherente al derecho a la libertad y la seguridad personales y al derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Durante los cuatro días que el Sr. Magoti permaneció recluido en régimen de incomunicación, fue interrogado sin que estuviera presente su abogado. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a

⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 31.

Recurrir ante un Tribunal, las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su reclusión, en particular inmediatamente después de que se practique la detención. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que se han vulnerado el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto, y el principio 18, párrafos 1 y 3, del Conjunto de Principios. Además, el Sr. Magoti debería haber podido notificar su detención a sus familiares, por lo que el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado el principio 16, párrafo 1, del Conjunto de Principios.

50. Según la fuente, el Sr. Magoti no puede obtener la libertad bajo fianza porque está acusado de delitos tipificados en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, de 2006, y, con arreglo al artículo 148, párrafo 5, de la Ley de Procedimiento Penal, un agente de policía encargado de una comisaría, o un tribunal ante el que sea llevado o comparezca un acusado, no puede conceder la libertad bajo fianza cuando se imputan determinados delitos, entre ellos el blanqueo de dinero, según se tipifica este en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero.

51. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha confirmado en repetidas ocasiones que la reclusión previa al juicio obligatoria —impuesta en este caso por un delito para el que no se admite la libertad bajo fianza de conformidad con el artículo 148, párrafo 5, de la Ley de Procedimiento Penal— entraña una contravención de las obligaciones que incumben al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos¹⁰. En particular, la no admisión de la libertad bajo fianza para determinados delitos contraviene la exigencia enunciada en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto de que la reclusión previa al juicio sea una medida excepcional y no la regla general¹¹. La no admisión de la libertad bajo fianza para determinados delitos también contraviene la exigencia de que la reclusión previa al juicio se base en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria, habida cuenta de todas las circunstancias, para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito¹². Como ha afirmado el Comité de Derechos Humanos, la reclusión previa al juicio no debe ser preceptiva para todas las personas acusadas de un delito concreto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso¹³.

52. El Grupo de Trabajo considera que la no admisión de la libertad bajo fianza para determinados delitos también priva a la persona reclusa del derecho a buscar alternativas a la privación de libertad, lo que entraña una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. La imposición de la reclusión previa al juicio obligatoria a los acusados de determinados delitos invierte la presunción de inocencia, ya que las personas contra las que se incoan actuaciones penales son privadas de libertad de forma automática sin que se estudien debidamente medidas alternativas a la privación de libertad. Además, la reclusión previa al juicio obligatoria priva a las autoridades judiciales de una de sus funciones esenciales como miembros de un tribunal independiente e imparcial, a saber, la de evaluar la necesidad y la proporcionalidad de la privación de libertad en cada caso.

53. Aunque el carácter razonable de la dilación en llevar un caso a juicio debe evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, teniendo en cuenta su complejidad y otros factores pertinentes, el Grupo de Trabajo considera que el excesivo lapso transcurrido en el presente caso entre la detención y el juicio constituye una vulneración del artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto y el principio 38 del Conjunto de Principios. El Grupo de Trabajo considera que la necesidad de un juicio sin dilaciones es aún más imperiosa cuando se imputa un delito para el que no se admite la libertad bajo fianza. En este caso, el Sr. Magoti, que fue detenido el 20 de diciembre de 2019, lleva más de ocho meses recluso

¹⁰ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 24/2015, párrs. 36 a 40; núm. 61/2018, párrs. 47 y 48; y núm. 8/2020, párr. 77.

¹¹ Véanse también los principios 38 y 39 del Conjunto de Principios.

¹² Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 38.

¹³ *Ibid.*

sin posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza. La fuente informa de que la vista se ha aplazado en al menos tres ocasiones a petición de la fiscalía, que alega no haber concluido aún la investigación. No hay indicios de que la vista vaya a celebrarse pronto, y el Gobierno ha optado por no proporcionar explicaciones al Grupo de Trabajo para justificar el retraso. Además, dado que, según se ha concluido, la privación de libertad fue consecuencia del ejercicio por el Sr. Magoti de sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y, por consiguiente, se inscribe en la categoría II, su excesiva duración resulta todavía más grave, ya que el Sr. Magoti ni siquiera debió haber sido detenido¹⁴. El Grupo de Trabajo considera, pues, que el Gobierno no ha juzgado ni puesto en libertad al Sr. Magoti en un plazo razonable, por lo que ha vulnerado el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto.

54. El Grupo de Trabajo concluye que esa vulneración del derecho a un juicio imparcial reviste tal gravedad que la prisión preventiva del Sr. Magoti debe considerarse arbitraria según los términos de la categoría III.

Categoría V

55. El Grupo de Trabajo procede ahora a examinar si la privación de libertad del Sr. Magoti constituye discriminación ilegal con arreglo al derecho internacional, a los efectos de su adscripción a la categoría V.

56. El Grupo de Trabajo da por cierto que el Sr. Magoti es un abogado que ha trabajado para promover los derechos humanos en la República Unida de Tanzania y se ha dedicado abiertamente a cuestiones de interés público.

57. El Grupo de Trabajo ya ha establecido, en el análisis expuesto anteriormente en relación con la categoría II, que, según parece, el Sr. Magoti fue detenido y privado de libertad por ejercer de forma pacífica los derechos que le confiere el derecho internacional. Cuando se establece que la privación de libertad se debe al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, existen sólidas razones para suponer que esta constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de opinión política o de otra índole¹⁵.

58. El Grupo de Trabajo considera que la limitada información recibida de la fuente respalda, en general, la conjetura de que el Sr. Magoti fue perseguido por sus opiniones políticas o de otra índole o por su condición de defensor de los derechos humanos. En particular, el Grupo de Trabajo recuerda que las autoridades interrogaron al Sr. Magoti sobre su uso de los medios sociales y sus vínculos con ciudadanos que han criticado públicamente al Gobierno. El Grupo de Trabajo observa que, según la fuente, dos de las personas con quien se relaciona el Sr. Magoti critican duramente al Gobierno y también se enfrentan actualmente a diversas formas de represalia por exigir a este una mayor rendición de cuentas y más transparencia.

59. Puesto que el Gobierno no ha rebatido las alegaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo concluye que se han presentado indicios razonables de que el Sr. Magoti fue privado de libertad por motivos discriminatorios, a saber, por sus opiniones políticas o de otra índole o por su labor como defensor de los derechos humanos, lo que constituye una contravención de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto. Así pues, su privación de libertad se inscribe en la categoría V.

60. Por otro lado, la fuente sostiene que el vendar los ojos al Sr. Magoti fue un acto cruel e inhumano. Además, el Grupo de Trabajo observa que el secuestro debió de ser una experiencia sumamente estresante y recuerda que la reclusión en régimen de incomunicación entraña condiciones que dan lugar a vulneraciones de la Convención contra

¹⁴ Véanse las opiniones núm. 15/2020, párr. 71, y núm. 16/2020, párr. 77.

¹⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 88/2017, párr. 43, y núm. 13/2018, párr. 34.

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes¹⁶. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que examine estas alegaciones.

Decisión

61. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Tito Elia Magoti es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14, 19, 21, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

62. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Unida de Tanzania que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Magoti sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

63. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Magoti inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que esta plantea para los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para que el Sr. Magoti sea puesto en libertad de inmediato.

64. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias que rodean la privación arbitraria de libertad del Sr. Magoti y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

65. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas correspondientes.

66. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

67. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, y que, a este respecto, le indiquen en particular lo siguiente:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Magoti y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Magoti;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Magoti y, de ser así, cuál ha sido el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República Unida de Tanzania con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

¹⁶ Véase A/54/44, párr. 182 a); además, el Relator Especial sobre la tortura ha sostenido sistemáticamente que el uso de la reclusión en régimen de incomunicación es ilegal (A/54/426, párr. 42; y A/HRC/13/39/Add.5, párr. 15.6).

68. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

69. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

70. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado¹⁷.

[Aprobada el 24 de agosto de 2020]

¹⁷ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.